



Colombia

La situación del conflicto armado y la violencia y su impacto sobre la población

Análisis del primer trimestre 2011

La situación del conflicto armado y la violencia y su impacto sobre la población

Análisis del primer trimestre 2011

Introducción

La identificación de personas, comunidades y regiones en situación de riesgo, al igual que la respuesta requerida para propiciar su protección, exige un continuo seguimiento a la situación política, de conflicto armado y violencia del país y a las emergencias generadas por los desplazamientos forzados.

La velocidad con la que se presentan los cambios políticos al igual que los cambios de intensidad en la violencia, tanto en su dimensión regional como el mayor riesgo temporal sobre determinados sectores de la población, hace necesario efectuar actualizaciones periódicas que faciliten respuestas en protección acordes con las necesidades de la población.

Este documento pretende ofrecer elementos de análisis que permitan identificar necesidades de protección de la población. Está dividido en tres partes: La primera, se concentra en la dinámica del conflicto y la violencia; la segunda, efectúa una aproximación al impacto sobre la población; y la última, ofrece un panorama de las emergencias causadas por el desplazamiento interno forzado por la violencia durante el primer trimestre del 2011.

Por tratarse de la primera actualización trimestral, algunos de los análisis presentados se remontan a los antecedentes que explican las razones de la coyuntura. A partir de ahora, se entregarán periódicamente análisis de contexto.

I. Adaptación estratégica de las organizaciones armadas a los nuevos escenarios del conflicto. Reconocimiento del impacto sobre la población.

El conflicto en Colombia y la dinámica de la violencia ha presentado en los últimos años una acelerada modificación, originada principalmente en el proceso de desmovilización de grupos paramilitares y en el fortalecimiento de la capacidad de las fuerzas militares y de policía del Estado. A mediados de la década anterior las cifras de violencia empezaron a mostrar alivios significativos: reducción de homicidios, masacres e incluso el flujo anual de población desplazada reflejaron el impacto inicial de las acciones del Estado.

Evolución de indicadores de violencia 2000 – 2005

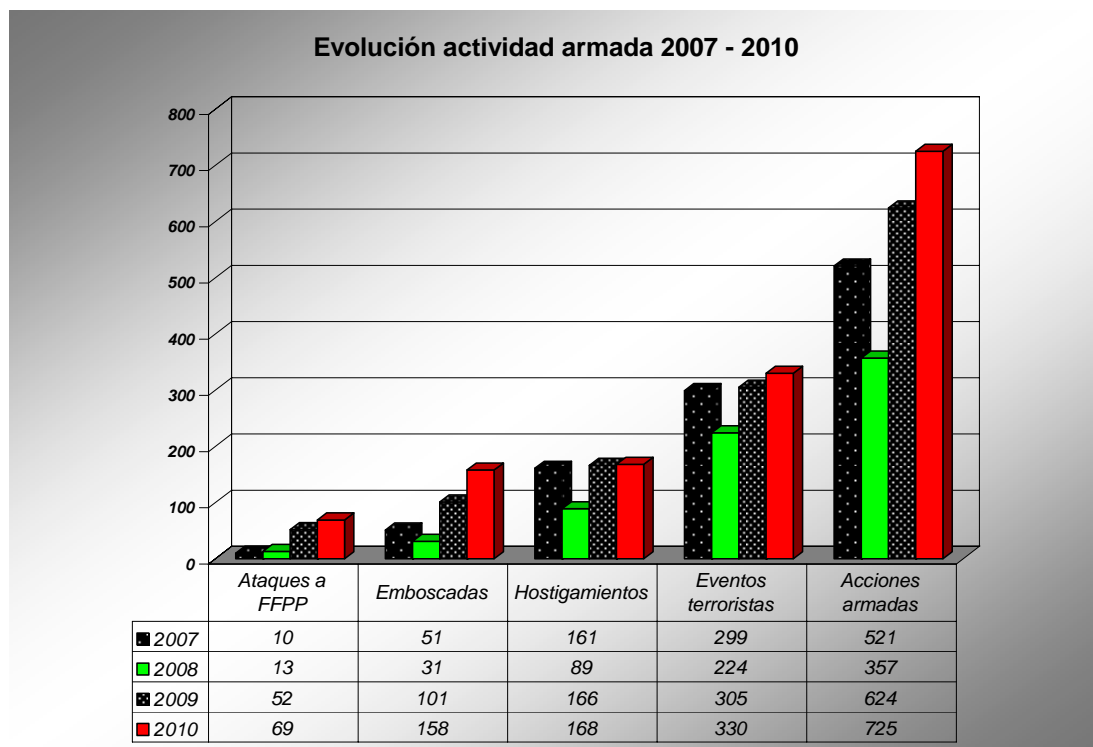
	2000	2002	2005
Homicidio	25.640	28.337	18.111
Secuestro	3.706	2.986	800
Masacres	115	77	48
Víctimas de masacre	1.403	680	252
Desplazados	308.378	464.873	275.979

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos. Vicepresidencia de la República.

Sin embargo, se advertía desde ese momento que podrían presentarse impactos no deseados como consecuencia de la forma como se estaba realizando el proceso de desmovilización. En particular, en relación con la continuidad en el accionar de grupos desmovilizados y la aparición de organizaciones en zonas dónde operaban grupos paramilitares. De igual manera, se evidenciaban los riesgos por una mayor concentración de la actividad militar de la guerrilla en zonas aisladas y fronteras, un mayor uso de minas antipersona y por el establecimiento de restricciones a la libre movilidad de las poblaciones en sus zonas de presencia.

Como se observa en el gráfico siguiente, las condiciones de seguridad empiezan a mostrar una nueva fase de deterioro desde mediados de 2008, que si bien en términos de cifras resultan significativamente inferiores a las registradas entre 1997 y 2004, constituyen una alerta frente a la efectividad de las estrategias que se están empleando y evidencian un mayor impacto sobre la población.

La percepción general es que hay un deterioro de las condiciones de seguridad tanto en lo urbano como en lo rural. Esta percepción se basa en el incremento en la actividad armada que creció en un 100% entre 2007 y 2010. La guerrilla de las FARC ha retomado su iniciativa dentro del proceso de adaptación a las estrategias militares que con éxito el Estado vino implementando desde comienzos de la década anterior¹. Por su parte, los grupos post desmovilización avanzan en una fase de agrupación. Lo anterior se suma al incremento de las disputas territoriales por parte de grupos armados de diversa configuración – desde pequeños combos, hasta organizaciones guerrilleras y paramilitares – en zonas marginales de grandes ciudades, así como a un incremento de la delincuencia organizada en áreas urbanas.



Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República.

¹ Ver informe especial de revista Semana: La seguridad en entredicho. <http://www.semana.com/nacion/seguridad-entredicho/155480-3.aspx>

Así mismo, la percepción de inseguridad se basa en el hecho que la acción de los grupos post desmovilización², pese a que nunca dejó de presentarse, es ahora más visible para el conjunto de la sociedad, en la medida en que se incrementaron en número las masacres de población, en que son más difundidas las disputas territoriales y en el hecho que han asesinado a personas que generan rechazo colectivo en la sociedad – como estudiantes de universidades privadas de Bogotá³.

Evolución de cifras de violencia Comparativo enero – marzo 2010/2011

	2010	2011	Cambio %
Homicidio	3.666	3.560	-3%
Casos de Masacre	9	12	33%
Víctimas de Masacre	42	52	24%
Secuestro	70	85	21%

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos. Vicepresidencia de la República.

Las FARC. Guerrilla debilitada que se adapta a los cambios del conflicto

Los contundentes golpes que las Fuerzas Armadas han dado a la guerrilla de las FARC han debilitado su capacidad de acción. Frente a esa debilidad, las FARC se encuentran en proceso de adaptación, lo que las ha llevado a replegarse hacia zonas de frontera y áreas aisladas, a operar en unidades más reducidas para evitar el impacto de la acción de la Fuerza Aérea y a definir estrategias que garanticen su supervivencia, mediante la diversificación de fuentes de financiamiento, el incremento de acciones de reclutamiento forzado y la realización de alianzas con grupos post desmovilización. En la actualidad, no hay perspectivas ni de derrota militar ni de acuerdo de paz con esta organización.

Las FARC han sufrido bajas significativas dentro de su cúpula militar. Dos de los miembros del Secretariado del grupo armado perdieron la vida en bombardeos de las Fuerzas Militares: Raúl Reyes en Ecuador (marzo de 2008) y el Mono Jojoy, en la Macarena, sur oriente del país (Septiembre de 2010). Las políticas de recompensas han impactado internamente a las FARC, el ejemplo más evidente es el caso de Iván Ríos, miembro del Secretariado, que murió a manos de otro guerrillero que aspiraba a obtener pago por la muerte de su compañero.

La inteligencia militar ha permitido el éxito de estos golpes y ha sido eficiente tanto fuera como dentro del país, tanto que logró ubicar a Rodrigo Granda, “canciller de las FARC”, en Venezuela y a Ricardo Palmera en Ecuador. Este último, miembro también del Secretario, fue posteriormente extraditado a Estados Unidos. A los golpes al Secretariado se une la muerte en combate y la captura de comandantes de bloques en diferentes zonas del país, y la efectividad de las operaciones de liberación de secuestrados. La muerte por causas naturales del comandante histórico de la organización, Manuel Marulanda Vélez, cierra el cuadro de debilitamiento en la estructura de mando del grupo guerrillero.

² Esta categoría de grupos incluye grupos paramilitares que continuaron operando con posterioridad al proceso de desmovilización, grupos que se reagruparon luego de la desmovilización y nuevas organizaciones armadas que han aparecido, inicialmente en las zonas despejadas por los paramilitares pero que han ido ampliando su presencia a diferentes zonas del país.

³ Margarita Gómez, de 23 años, y Mateo Matamala, de 26, fueron asesinados en Córdoba. Un fiscal de la unidad contra las bandas criminales asumió la investigación por el asesinato de los universitarios.

Según datos del Gobierno, citados por el International Crisis Group (ICG), entre enero de 2003 y enero de 2009 las fuerzas estatales causaron la muerte de 10.806 guerrilleros y capturaron a 26.648. A estas cifras se adicionan los 11.615 guerrilleros que se desmovilizaron entre el 2002 y el 2009⁴.

Pese a las bajas sufridas, los analistas estiman que la organización tiene entre 8.000 y 10.000 combatientes⁵. Así mismo, que han desarrollado estrategias para alcanzar su supervivencia, incluyendo el reclutamiento forzado de población⁶. La capacidad de adaptación de las FARC les ha permitido retomar la iniciativa militar e incrementar incluso el número de sus acciones bélicas entre 2008 y 2009⁷. De acuerdo con la Fundación Seguridad y Democracia, el 2010 fue el año de mayor actividad de la guerrilla desde el 2006⁸.

En su adaptación ante el fortalecimiento militar de los organismos de seguridad del Estado, las FARC han desarrollado mecanismos para garantizar su sostenibilidad. Además del ya citado incremento del reclutamiento, se encuentra la diversificación de fuentes de financiamiento, en la que es más visible su participación en minería, así como acuerdos inestables con grupos post desmovilización en diferentes zonas del país⁹.

Para contrarrestar el impacto de los operativos militares aéreos y de gran escala, las FARC han acudido de manera creciente al uso de minas antipersona, al empleo de francotiradores, al establecimiento de controles de movilidad en áreas donde tienen presencia. Así mismo, modificaron sus operaciones a unidades más reducidas y se han venido replegando en lugares aislados, incluidas las zonas de frontera bajo la idea que en esas regiones podría ser menor la efectividad de las fuerzas militares¹⁰.

Todos estos cambios se reflejan en el impacto sobre las comunidades y la población. Los enfrentamientos entre las FARC y el Ejército se concentran en zonas de presencia de los miembros del Secretariado, lo que ha llevado a la intensificación de acciones bélicas y la distracción por parte de las FARC de las operaciones militares que, como se apreciará más adelante, ha sido causa de desplazamientos masivos desde el segundo semestre de 2010. Las zonas de concentración de esa actividad militar se relacionan en la tabla siguiente.

⁴ International Crisis Group. "Poner fin al conflicto con las Farc en Colombia: Jugar la carta correcta. 26 de marzo de 2009.

⁵ International Crisis Group. Colombia: Una oportunidad del Presidente Santos de poner fin al conflicto. Bogotá 13 de octubre de 2010.

⁶ Idem.

⁷ De acuerdo con la información citada por el ICG del informe de Gobierno "Logros de la Política de Seguridad Democrática, enero 2010, abril 2010" las FARC incrementaron sus actividades insurgentes en %210". ICG. "Mejorar la política de seguridad en Colombia" 29 de junio de 2010.

⁸ Citado por Revista Semana: "La seguridad en entredicho". <http://www.semana.com/nacion/seguridad-entredicho/155480-3.aspx>

⁹ ICG. Mejorar la política de seguridad en Colombia. Bogotá 29 de junio de 2010.

¹⁰ ICG. Poner fin al conflicto con las FARC en Colombia: Jugar la carta correcta. Bogotá 26 de marzo de 2009.



Áreas de concentración de acciones armadas durante 2010.

Concentración de las FARC	Frontera	Bajo Cauca.	Pacifico
<p><u>Caquetá:</u> La Montañita, San José del Fragua.</p> <p><u>Cauca:</u> Cajibío, Caldone, Caloto, Corinto Jambaló, Pindamó, Toribío.</p> <p><u>Guaviare:</u> San José del Guaviare.</p> <p><u>Huila:</u> Neiva.</p> <p><u>Meta:</u> Mesetas, Uribe y Vistahermosa Tolima: Chaparral, Ibagué.</p> <p><u>Valle:</u> Florida</p>	<p><u>Arauca:</u> Araquita, Sarvena y Tame.</p> <p><u>Guajira:</u> Riohacha</p> <p><u>Nariño:</u> Ipiales</p> <p><u>Norte de</u></p> <p><u>Santander:</u> San Calixto, Teorema y Tibú.</p> <p><u>Putumayo:</u> Puerto Asís.</p>	<p><u>Antioquia:</u> Tarazá y Caucasia</p>	<p><u>Cauca:</u> Argelia y El Tambo</p> <p><u>Choco:</u> Quibdó</p> <p><u>Nariño:</u> Barbacoas, Mallaza, Pasto, Ricaurte.</p> <p>Samaniego y Tumaco.</p> <p><u>Valle del Cauca:</u> Buenaventura.</p>

Como lo ha identificado la Defensoría del Pueblo, la inestabilidad en las alianzas entre grupos guerrilleros y grupos post desmovilización tiene un fuerte impacto sobre la población por la intensificación de la confrontación en momentos en que éstas se rompen. Tal es el caso del municipio de Argelia en el Cauca y Barbacoas en Nariño, y que, dada la existencia de este tipo de alianzas en otras zonas del país, se presenta como factor de riesgo adicional en el futuro para la población¹¹.

El hecho de que en numerosos de los más importantes logros de la acción militar se haya señalado que se han alcanzado gracias a la colaboración de la comunidad y a la infiltración de las fuerzas armadas en la guerrilla, ha generado a su vez un mayor control de la movilidad en las zonas de presencia guerrillera, con el correspondiente mayor impacto sobre la población que ahora es estigmatizada desde diferentes sectores.

El impacto no deseado de la desmovilización

La reducción de las masacres y el crecimiento menor del desplazamiento forzado fue una de las consecuencias inmediatas del proceso de desmovilización efectuado a partir de 2005. Sin embargo, el reacomodamiento de las estructuras armadas que continuaron operando y que surgieron con posterioridad al proceso, ha ido incrementando los escenarios de disputa territorial, el nivel de violencia en esas zonas y, como consecuencia de ello, el impacto sobre la población.

Estas estructuras armadas – grupos post desmovilización – han aparecido en diferentes lugares del país y han asumido variadas denominaciones. Su organización y líneas de mando han sido cambiantes. Las disputas por el control de territorios no les han permitido consolidar áreas, por el contrario, han sido frecuentes los cambios en su presencia geográfica. Tal inestabilidad y disputas han incrementado los riesgos para la población.

En su accionar, los grupos post desmovilización han establecido una relación con los territorios, y las personas y comunidades que los habitan, de agente depredador de recursos,

¹¹ Ver: Defensoría del Pueblo Nota de Seguimiento (NS) 007 de 2011 al Informe de Riesgo (IR) 29 de 2007 y NS 009 del 2011 al IR 15 del 2005.

lo cual se evidencia en la ausencia de respeto por principios humanitarios y la subvaloración de los costos jurídicos y políticos que se pueden derivar de sus actos.

Los impactos no deseados del proceso de desmovilización eran previsible. La desmovilización de una sola de las partes en el conflicto, el hecho que ésta hubiese sido parcial, la filtración de estructuras del narcotráfico,¹² la extradición de algunos de los comandantes y la ausencia de planeación del proceso de reintegración de combatientes son las causas de los efectos negativos de esta desmovilización.

Esta es una de las razones del por qué las zonas de concentración de la violencia están relacionadas con áreas estratégicas para los narcotraficantes y de influencia de sus ejércitos privados y sus franquicias paramilitares.

El ejemplo más claro es la violencia en las comunas de Medellín, la cual ha estado ligada desde comienzos de la década anterior con las disputas dentro del paramilitarismo y del narcotráfico. Diego Murillo (conocido como Adolfo Paz o Don Berna), narcotraficante que se desmovilizó como paramilitar en noviembre 2003 y que fue extraditado a Estados Unidos el 13 mayo de 2008, fue el creador del Bloque Cacique Nutibara, surgido en 2001 y desmovilizado en 2003 y que combatió al Bloque Metro de la Autodefensas desde el 2002¹³.

El vacío dejado por la extradición de los comandantes de grupos paramilitares es el origen de las nuevas disputas entre grupos armados que buscan establecer el control de áreas periféricas de la ciudad para alcanzar el monopolio de las oficinas de cobro, que son modelos de extorsión a transportadores, comerciantes y de control de la distribución de drogas dentro de la ciudad. La influencia de Don Berna va más allá de la violencia en Medellín, se amplía a las disputas entre organizaciones del narcotráfico y paramilitares en Putumayo, Nariño, Valle y Córdoba¹⁴.

Al igual que en el caso de Don Berna, son las guerras entre sectores de narcotraficantes incluidos en el proceso de desmovilización y algunos de ellos extraditados a Estados Unidos,

¹² Desde principios de 2000 las autodefensas "vendieron franquicias de las AUC" a conocidos narcotraficantes (Gordo Lindo, Don Berna, Macaco, Cuco Vanoy, Los Mellizos, Chupeta, Juan Carlos Sierra, Miguel Arroyave), este hecho se incrementó en el periodo cercano a la desmovilización – Ver: www.verdadabierta.com/narcotrafico-periodo4. A la venta de franquicias se sumó la filtración de delincuentes y otras personas no pertenecientes a los grupos paramilitares durante la desmovilización. Así lo reconoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en el Informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: Etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales" OEA/Ser.LV/II.129 Doc 6 del 2 de octubre de 2007, señaló "La CIDH observó que el incumplimiento de la presentación del listado permitió y propició la llegada de personas que no necesariamente pertenecían a las estructuras armadas a desmovilizarse". En el mismo sentido Human Rights Watch afirmó. "Existen pruebas substanciales de que muchas personas que participaron en el proceso de desmovilización no eran verdaderos paramilitares, y que porciones de los grupos continuaron operando. También existen pruebas de que algunos miembros de los grupos supuestamente desmovilizados continuaron participando en actividades ilegales. ... Las denuncias de fraude eran tan generalizadas que el Alto comisionado para la paz en Colombia, Luis Carlos Restrepo, señaló que... nos revolveron delincuentes callejeros 48 horas antes de la desmovilización y nos los metieron en el paquete de desmovilizados" (Human Rights Watch. Colombia. Herederos de los Paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia). En el mismo sentido se han presentado denuncias de dos ex jefes paramilitares: Ever Veloza, H.H, y Freddy Rendón, "el Alemán", quienes aseguraron que se habían presentado trampas en las desmovilizaciones de los frentes Cacique Nutibara y Héroes de Granada. Con bases en estas declaraciones la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, abrieron investigaciones.

¹³ ver: <http://www.nuevoarcoiris.org.co/local/regiones1103.htm>

¹⁴ Ver: <http://verdadabierta.com/victimarios/los-jefes/715-perfil-diego-fernando-murillo-bejarano-alias-don-berna>

las causas de la continuidad y exacerbación de la violencia en zonas como el Norte del Valle, Urabá, el Bajo Cauca Antioqueño, Córdoba y Sucre.

Es por eso que resulta ficticio plantear una separación de la violencia a partir del proceso de desmovilización, dado que lo que hay es una línea de continuidad generada precisamente por la forma en que se da la desmovilización y por la pérdida de monopolios, agudizada con los vacíos dejados con la extradición de las figuras más visibles del narcotráfico y el paramilitarismo hacia Estados Unidos en 2008.

Las ya citadas alianzas inestables con la guerrilla establecen un mayor grado de vulnerabilidad para la población, en la medida en que limita las estrategias de las comunidades para sobrevivir en medio de la presión de grupos armados – relaciones de subordinación con comandantes locales – y genera rupturas que desembocan en el intensificación de la violencia en esas áreas.

Por ejemplo, se señalaba que entre las FARC y el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) existía una alianza en el oriente del país¹⁵, no obstante, meses antes de la muerte de su comandante – Pedro Oliveria Guerrero, alias Cuchillo, ocurrida en diciembre de 2010 – se habían incrementado los combates entre estas dos organizaciones, siendo esta la causa de desplazamientos masivos en Vistahermosa en enero del 2011¹⁶.

Situación similar se presentó en la zona de cordillera en Nariño y Cauca¹⁷. En el caso de Argelia, Cauca, fue la ruptura de esa alianza la que generó fuertes combates y desplazamientos de población desde el último trimestre de 2010 y que se extendieron hasta comienzos de 2011¹⁸.

Como se señalaba, uno de las características de los grupos post desmovilización es la búsqueda de rentas en los recursos locales, lo que los lleva a establecer alianzas o fuertes disputas con otras organizaciones armadas y el crimen organizado.

De acuerdo con el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, estos grupos *"están en todas las actividades criminales y en los hechos delictivos, pues donde hay actividades delictivas, ahí están [los grupos post desmovilización]: minería ilegal, extorsión, microtráfico, expendio y distribución de drogas, en todas las actividades ilegales"*¹⁹. En el Congreso de la República, el Ministro señaló que estos grupos se han "venido financiando

¹⁵ Al respecto el ICG señaló: *"En los llanos del Orinoco, en el oriente colombiano, las operaciones del narcotráfico son compartidas por las FARC y el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC)...La pasta de coca que se produce en territorios controlados por las FARC se envía a laboratorios controlados ya sea por las FARC o el ERPAC. La cocaína es enviada a Venezuela por corredores controlados por ERPAC. Sin embargo, este arreglo es muy inestable y ya ha producido confrontaciones abiertas"*. ICG Poner fin al conflicto con las FARC en Colombia: Jugar la carta correcta. 26 de marzo de 2009.

¹⁶ El 7 de enero 13 familias se desplazaron por los enfrentamiento entre FARC y ERPAC de la vereda Caño Amarillo.

¹⁷ ICG Mejorar la política de seguridad en Colombia. 29 de junio de 2010.

¹⁸ Defensoría del Pueblo. NS 009 de 2011 al IR 15 de 2005.

¹⁹ Citado por Edunews. <http://www.edunewscolombia.com/2011/04/01/estructura-de-bandas-criminales-podría-sobrepasar-los-4-mil-miembros-gobierno/>

concretamente de la explotación de oro²⁰. Desde su surgimiento se ha evidenciado su intervención en la minería ilegal²¹

Pero el financiamiento de los grupos no se agota en el narcotráfico, la coca y la minería. Están involucrados en el mercado de apuestas, la distribución de alimentos en centrales de abastos de grandes ciudades, el transporte urbano, la extorsión a comerciantes, la extorsión a empleados públicos, en particular en el sector de la educación y salud. El director de la Policía Nacional señaló en mayo de 2011 que estaban investigando los vínculos entre funcionarios de la salud y los grupos post desmovilización, al igual que en 2006 había ocurrido con grupos paramilitares que en la Costa Atlántica habían controlado algunas empresas prestadoras de salud.

Después del surgimiento de numerosos grupos en diferentes regiones del país, al parecer los grupos post desmovilización estarían sufriendo un reagrupamiento, bien sea como resultado de acuerdos o como consecuencia del triunfo militar de unos sobre otros, lo que los ubica en un escenario similar al de las autodefensas en 1996. Al igual que en aquella época, en la que el conjunto de ejércitos privados se unieron en una confederación nacional de autodefensas, en la actualidad se está observando la integración en un número más reducido de organizaciones en las que empieza a ser visible una estructura de mando y mecanismos de articulación y coordinación en diferentes zonas del país.

La Fuerza Pública ha identificado organizaciones criminales con estructuras más sólidas que las diferencian de otras de menor nivel. Las estructuras que reconoce el Estado incluye a: Urabeños, Rastrojos, Paisas, Renacer, ERPAC, y Los Machos²². Calcula que pueden estar compuestos por más de 4.000 integrantes, sin contabilizar las bandas locales que les sirven de soporte y que tendrían operación en 151 municipios del país distribuidos en 17 departamentos.

Para la ONG INDEPAZ, la cifra es mayor. De acuerdo con su director, la estructura fija de estas organizaciones podría estar por encima de los 7 mil integrantes más un número similar de estructuras de apoyo, lo que llevaría a 14.500 integrantes. Estos estarían distribuidos en 360 municipios y en 30 departamentos del país, habiendo pasado de 43 organizaciones armadas a 15 en la actualidad, como parte de ese proceso de reestructuración²³.

Departamentos donde habrían sido registradas acciones de los grupos post desmovilización reconocidos por las autoridades durante el 2010²⁴.

Grupo	Departamento
Urabeños	Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Bogotá, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Sucre
Rastrojos	Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Bogotá, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre y Valle del Cauca.
Paisas	Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Bogotá, La Guajira, Magdalena y Sucre

²⁰ Ver: <http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1450683>

²¹ Ver: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/bacrim_detras_de_mineria_ilegal.asp

²² Ministerio del Interior y de Justicia. Decreto 2374 de 2010

²³ Ver: V informe Indepaz sobre narcoparamilitares en 2010.

http://www.indepaz.org.co/attachments/586_V%20Informe%202010%20INDEPAZ%2015-03-2011.pdf

²⁴ INDEPAZ. Idem. La tabla incluye los departamentos en los que según el informe de INDEPAZ se presentó actividad de los grupos reconocidos por el Gobierno, al cual se le ha sumado las Águilas Negras. En el informe de INDEPAZ se identifican 8 grupos más.

**UNHCR**United Nations High Commissioner for Refugees
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Renacer	Chocó
ERPAC	Antioquia, Arauca, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Bogotá, Güanía, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Quindío y Vichada.
Machos	Valle del Cauca
Aguilas Negras	Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Chocó, Cundinamarca, Bogotá, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre y Valle del Cauca. (no reconocida por las autoridades)

Fuente: Indepaz.

El Gobierno Nacional ha establecido una estrategia de combate a estas organizaciones, que al igual que en el caso de la guerrilla, se centra en la captura de las figuras visibles. Entre 2006 y 2010 fueron detenidos 10.400 miembros de estos grupos²⁵. Tan sólo en el primer trimestre de 2011, y de acuerdo con la cifras del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, habrían sido capturados 808 de sus integrantes. El nivel de involucramiento de desmovilizados en estas organizaciones pareciera ser alto; de acuerdo con la información registrada en el décimo quinto informe del Secretario General de la OEA sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP – OEA), 1.555 desmovilizados han sido asesinados, 179 más han muerto en combate y 1.844 han sido capturados por su participación en hechos de violencia²⁶.

En esa lógica, uno de los principales objetivos de las diferentes y numerosas estructuras armadas que operan el país es mantener su sostenibilidad estratégica, lo cual está generando (i) intensificación en las acciones de vinculación y reclutamiento para mantener una base combatiente; (ii) diversificación de fuentes de financiamiento para poder competir con el resto de estructuras armadas; (iii) proliferación de alianzas inestables con todo tipo de organizaciones y iv) degradación de las estrategias de control de la población.

En un escenario como el descrito es complejo tanto la identificación de los victimarios como la precisión del perfil de las personas o comunidades en mayor riesgo. La proliferación de organizaciones y diversificación de intereses hace difícil identificarlos, pero al mismo tiempo facilita que terceros usen el nombre de las organizaciones armadas para obtener beneficios particulares, hecho que no le resta ni el riesgo ni el impacto sobre las víctimas, por el contrario, lo potencia en la medida en que ante la ausencia de monopolios es más difícil prevenir el daño.

II. Impacto sobre la población

Los grupos armados que operan en Colombia son menos sólidos y más numerosos que los que actuaban hace un lustro. Se han incrementado los escenarios de disputa de los territorios y han diversificado sus fuentes de financiamiento. En las áreas donde tales enfrentamientos se presentan, la población está cada vez más a merced de la arbitrariedad de grupos que, por su propia debilidad, requieren acudir a mayor violencia para alcanzar sus objetivos y por su naturaleza están cada vez alejados del acatamiento de códigos de respeto de la población. En la actualidad es más difícil precisar las fuentes de violencia e identificar el perfil de las personas en riesgo.

²⁵ http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/N/bacrim_una_amenaza_y_que_contenerlas_dice_naranja.asp?pag=2&todos=1

²⁶ http://www.mapp-oea.net/documentos/ultimo_informe.pdf

Áreas de mayor riesgo

De acuerdo con el seguimiento efectuado desde 2004, unas regiones del país concentran de manera desproporcionada el mayor impacto de las acciones de la violencia. Estas zonas, con pequeñas alteraciones, continúan siendo prácticamente las mismas, aun cuando en algunos casos las explicaciones del por qué revisten especial valor estratégico para grupos armados pueden haberse transformado en los últimos 6 años.

Los grupos armados concentran sus actividades en lugares donde encuentran ventajas comparativas para mantener sus acciones y obtener de ellas rentas que les permitan garantizar su subsistencia. Por eso, las zonas marginadas del desarrollo y con baja presencia institucional son útiles para la explotación directa de recursos – coca, minería ilegal – o para obtener beneficios de otros como en el caso de la extorsión al comercio, a actividades relacionadas con economías extractivas e incluso frente a la obtención de recursos a partir de las acciones del Estado, como es el caso de la extorsión a funcionarios públicos y a beneficiarios de subsidios estatales.

La concentración del impacto de la violencia se da también en zonas de ocupación histórica de grupos guerrilleros, en donde además se ha focalizado la acción de las Fuerzas Armadas en la persecución de las figuras más visibles de los grupos guerrilleros.

Así mismo, en lugares donde se ha aglutinado la retaguardia de la guerrilla ante el desplazamiento generado por la actividad de las Fuerzas Armadas en otras zonas del país y que ha llevado a los grupos subversivos a ubicarse en zonas más profundas de las selvas amazónicas y de la Orinoquía.

El riesgo para la población se eleva también en zonas de frontera en las que el nivel de intensidad del accionar de la guerrilla podría estarse fortaleciendo ante el cierre de los espacios que ha tenido en países fronterizos, que incluye tanto el área que limita con Ecuador, Panamá y Venezuela y que se refleja en su comportamiento en departamentos como el Chocó, Norte de Santander, Arauca, Putumayo y Nariño.

En el panorama de violencia y desplazamiento aparece en los últimos años el archipiélago de San Andrés y Providencia, que no hacía parte de la geografía de la violencia del país y que se ha convertido en zona de disputa de organizaciones armadas por su ubicación estratégica en el tráfico de drogas hacia el norte del continente. De igual manera, empieza a emerger el departamento del Amazonas en el sur oriente, en la frontera con Brasil y Perú, por razones similares.

Los hechos de violencia también se presentan en forma más intensa en zonas donde persisten conflictos de tierras, en especial en aquellas en las cuales se debate la vocación productiva de las mismas y el uso de los suelos; de igual manera, en sitios donde se llevan a cabo procesos de restitución que afectan inversiones efectuadas durante los años del desplazamiento, como es el caso del Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre y Magdalena Medio para citar algunos.

Las zonas marginales de grandes ciudades, pero principalmente de Medellín, se han convertido en escenarios de disputa territorial luego de la ya mencionada desmovilización y posterior extradición de jefes paramilitares. A los vacíos dejados, se adicionan los cambios que

se han registrado en términos del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Europa que tienen un impacto sobre la violencia local, especialmente en estas áreas en la medida en que se especula que ante la menor preponderancia de los carteles colombianos en el mercado internacional, los grupos han tenido que compensar la caída en sus ingresos con el incremento de la distribución local de drogas.

De allí que uno de los principales bienes en disputa por parte de las “oficinas de cobro” sea la recuperación de las ganancias derivadas de la distribución local de drogas. Hecho que se materializa posteriormente en enfrentamientos a nivel local de pandillas, combos o bandas y que incrementa los índices de violencia en zonas marginales de medianas y grandes ciudades.

Como se observa en las declaraciones de la población desplazada, estos combos, bandas o pandillas no agotan su actividad en el control y recuperación de ganancias de la venta y distribución de drogas ni en la extorsión de comerciantes y transportadores, sino además cumplen, como históricamente lo han hecho los grupos armados en el país, funciones de regulación y provisión de bienes públicos como la seguridad y la “justicia” de quienes quieren resolver en corto plazo sus disputas personales.

Si bien el tipo de actividades que desarrollan, y las alianzas que con otras organizaciones realizan – incluida la guerrilla –, los hacen ver ajenos a una estrategia contrainsurgente, en la práctica su presencia en zonas marginales de las ciudades impide la recuperación por parte de milicias de la guerrilla de las áreas de las cuales fueron en gran medida expulsadas por los paramilitares en la primera mitad de la década anterior. En ese orden de ideas, estas organizaciones son funcionales al establecimiento de barreras para impedir que los grupos guerrilleros recuperen su campo de acción en las grandes ciudades.

Esta realidad se refleja tanto en las zonas de mayor intensidad del homicidio²⁷ como en las áreas donde con mayor frecuencia se han presentado desplazamientos masivos de población. El 50% de homicidios, por ejemplo, está concentrado en 6 de los 32 departamentos del país. Un 25,4% en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, y un 24,3% en Chocó, Córdoba y Antioquia. Situación que se sigue presentando en este año, en donde ha sido reiterada la preocupación por las cifras de homicidio en Pasto y Tumaco, en Nariño, en Argelia, en el Cauca, en Buenaventura, Cali y Tulúa en el Valle y en Lorica, Montería y Tierralta en Córdoba²⁸.

Extorsión: actividad invisible de amplio impacto sobre la población

Una de las más graves consecuencias de la lógica depredadora en que están operando los grupos armados es la generalización de la extorsión en el país, ya no sólo dirigida en contra de los propietarios de grandes capitales – quienes cuentan con servicios públicos y privados de seguridad – sino por el contrario hacia comerciantes locales, transportadores, funcionarios públicos, beneficiarios de subsidios del Estado, etc. La situación ha llevado incluso a que miembros de organismos humanitarios hayan sido objeto de presión armada para el pago de estas extorsiones²⁹.

²⁷ Ver informe de gestión 2010 del Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias forenses. [Http://www.elpais.com/elpais/archivos/medicina-legal-2010.pdf](http://www.elpais.com/elpais/archivos/medicina-legal-2010.pdf)

²⁸ Ver: El Tiempo: “Valle, Cauca y Nariño, zona roja de homicidios”. Bandas criminales, lucha por el control del narcotráfico, guerrilla y pandillas generan la mayor violencia en la región”. 10 de abril de 2011.

²⁹ En julio de 2005, el director de la Policía Nacional, General Oscar Naranjo, reconoció el incremento del problema, en particular frente a medianos y pequeños comerciantes: “ha pretendido instalarse en las ciudades la

Es una realidad que no aparece registrada adecuadamente en bases de datos en la medida en que tanto por el temor de las víctimas y la limitada confianza en autoridades locales, como por las cuantías de estos cobros, no es objeto de registro sistemático³⁰. No obstante, de acuerdo con los registros de las autoridades, entre 2008 y 2009 la extorsión creció en 65%³¹. El temor de denunciar se agudiza en la medida en que un importante centro de extorsión son las cárceles del país. Aun en el caso en que sea capturado el responsable, la víctima continuaría en condiciones de vulnerabilidad.

Así mismo, la capacidad de persecución sobre las personas que eluden o suspenden el pago es cada vez mayor, dado que las organizaciones han venido alcanzando niveles de coordinación en estructuras que operan en diversas zonas del país.

La extorsión aplicada sobre determinadas actividades genera adicionalmente un efecto de control sobre la población, que facilita el arraigo del grupo armado dentro de determinada comunidad o barrio. Los grupos armados se disputan el monopolio del cobro de las extorsiones tanto en actividades lícitas como las que se encuentran en la frontera de la ilegalidad, como la prostitución o el contrabando.

Reclutamiento Forzado

Si bien es difícil documentar la magnitud y el impacto del reclutamiento, este constituye una significativa causa de desplazamiento de la población, dado que opera como una de las pocas medidas efectivas de protección con la que cuentan los padres para eludir la presión de los grupos armados sobre sus hijos.

Debido a la ausencia de estadísticas, es difícil establecer las variaciones en estas prácticas. Sin embargo, en la medida en que se ha presentado un alto número de bajas tanto en las FARC como en los grupos post desmovilización, difícilmente los grupos armados habrían logrado subsistir de no haber aplicado medidas masivas y continuas de vinculación y reclutamiento.

Como lo señala la MAPP-OEA, "la capacidad de reclutamiento de nuevo personal también es importante porque pese a las numerosas capturas, los números totales de integrantes vinculados a estos grupos [post desmovilización] no se han reducido sustancialmente"³². Sólo el reclutamiento masivo podría reponer las, al menos, 49 mil bajas entre desmovilizados, capturados y muertos en combate que han sufrido los FARC entre 2003 y 2009, o las 10.400

llamada extorsión siciliana, es decir pequeña extorsión sobre ciudadanos de bajos y medianos ingresos donde es el cobro de una especie de favor que delincuentes harían a transportadores, comerciantes y tenderos, pero que sumada a esa actividad representa unos ingresos considerables para los criminales"
<http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1331740>

³⁰ Para el director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la extorsión no es fácil de denunciar, "porque en muchos casos la persona no cree ser víctima de extorsión ya que el dinero que los delincuentes le exigen son montos pequeños; y segundo, porque al ser casos de mínima cuantía, las autoridades judiciales no encuentran mérito para su instauración cuando se denuncian". Citado por el Colombiano. http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/das_lanzo_campana_contra_la_extorsion.asp

³¹ Ver, Comando General de las Fuerzas Militares. <http://www.cgfm.mil.co/CGFMPortal/faces/index.jsp?id=6658>

³² Ver: Décimo Quinto Informe trimestral de la MAPP – OEA. http://www.mappoea.net/documentos/ultimo_informe.pdf

capturas entre 2006 y 2010 y las 808 capturas que durante el primer trimestre del 2011, sufrieron los grupos post desmovilización.

En el reporte del Secretario General de las Naciones Unidas acerca de la niñez y el conflicto armado en Colombia, se expresó la preocupación por el crecimiento de la práctica del reclutamiento forzado, así como el hecho de que ésta se daba cada vez a más temprana edad. Por ejemplo, se indica que según reporte de UNICEF, mientras en 2002 la edad promedio de reclutamiento era de 13.8 años, en 2006 esta edad promedio había bajado a 12.8 años, pese al compromiso de las FARC de no vincular menores de 15 años. A mediados de 2010, el ICG señaló que la edad promedio de reclutamiento había bajado a 11.8 años.

Los informes de la Defensoría del Pueblo son recurrentes al señalar que existen prácticas de reclutamiento forzado en diferentes zonas del país, en ámbitos urbanos y rurales. En Antioquia, Cauca, Córdoba, Nariño, Sucre y el área metropolitana de Barranquilla³³. En particular el informe 6 de 2010, sobre la situación en Villavicencio, describe lo que podrían ser las nuevas técnicas de reclutamiento, que incluyen el engaño y la fuerza. El primero mediante ofertas de trabajo, que complementan con amenazas a las familias si intentan desertar. El segundo mediante el empleo de alucinógenos. En ambos casos las familias se sienten intimidadas para presentar la denuncia dado el control local que tienen los grupos armados³⁴.

Violencia Sexual

La violencia sigue siendo empleada en medio del conflicto. Al parecer los cambios en las estructuras de los grupos armados y la forma como se relacionan con la población podrían estar incrementando los riesgos de este tipo de violencia. Pese a que siempre se ha hablado de su relación con el desplazamiento forzado, no se ha clarificado su impacto como causa del mismo.

En un estudio de la Defensoría del Pueblo realizado en el 2007, el 18% de las mujeres encuestadas señalaron la violencia sexual como causa del desplazamiento³⁵. Pese a lo impactante de esta cifra, persiste el vacío de información en relación con la violencia sexual en el marco del conflicto y su impacto respecto al desplazamiento interno forzado.

En el trabajo desarrollado por ACNUR en áreas urbanas y rurales son cada vez más los casos en los que se identifican riesgos en materia de violencia sexual. En dos visitas realizadas en Córdoba se señalaban hechos extremos por parte de las comunidades. En los relatos de éstas, los hombres expresaban el miedo de ir a las labores del campo por el temor de dejar solas a sus compañeras e hijas dados los casos de violencia sexual que se habían presentado cuando ellos estaban ausentes. Las situaciones narradas evidenciaban el uso de la violencia

³³ Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas. Informes de Riesgo 1 y 3 de 2011 y Notas de Seguimiento 8, 9 y 11.

³⁴ Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas. IR 06 de 2010. "La estrategia de los grupos armados ilegales para contactar a los menores de edad ha consistido en ofrecerles trabajo en supuestas fincas palmicultoras...una vez los niños se encuentran en poder de los reclutadores, estos los trasladan a lugares distantes de las cabeceras municipales, en donde, por un lapso de tres meses reciben entrenamiento militar, para luego ubicarlos en zonas de interés del ERPAC...algunos inicialmente aceptan la vinculación a cambio de dinero, pero otros son coaccionados por medio de amenazas contra sus familias en caso de que intenten desertar. Sin embargo, también se han identificado casos en los que integrantes de los grupos paramilitares han intentado llevarse por la fuerza a los menores de edad, a través del suministro de sustancias alucinógenas..."

³⁵ Citado en: Refugees, International. Lari, Andrea & Teef, Melenie. "Colombia: Las mujeres desplazadas exigen que se les respeten sus derechos".

sexual como un instrumento de intimidación para lograr el control social de la población. Igual hallazgo había sido identificado en el trabajo con equipos humanitarios en Córdoba y Nariño, en el marco del Grupo Temático de Protección del equipo humanitario de país.

El vacío en la información no permite establecer los cambios en este tipo de hechos de violencia. Ante la duda de si la población habla más de estos casos porque encuentra más respuesta institucional o si las prácticas de grupos armados se han modificado con el tiempo, la información cualitativa disponible inclina la respuesta hacia un mayor peso de la ausencia de respeto de los grupos armados hacia la población.

Ese irrespeto está basado en la debilidad de las mismas organizaciones armadas; la necesidad, de una parte, de imponer el control, y de otra, de obtener rentas adicionales. Porque en los relatos de las comunidades, como se extrae de los informes de la Defensoría del Pueblo, uno de los principales móviles es la inducción a la explotación sexual de adolescentes.

De los reportes existentes se extrae la responsabilidad de todos los actores armados en este tipo de violaciones. Como se indica en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia de 2010, se identificaron casos de violencia sexual en los que se señala como responsable a integrantes de la fuerza pública colombiana en Arauca, Caldas, Cauca, Chocó, Meta y Vichada.

En el informe de la Alta Comisionada se expresa particular preocupación por la violencia sexual ejercida contra mujeres y niñas por grupos post desmovilización a quienes se les atribuye responsabilidad en hechos presentados en Antioquia, Cauca, Córdoba, Norte de Santander.

En los casos identificados por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo se señala la continuidad en la práctica de amenazas a través de panfletos contra trabajadoras sexuales o contra mujeres que a juicio del grupo armado son promiscuas o ejercen libertinaje sexual³⁶.

A los ejemplos de modelos de control social sobre determinados sectores de la población se suman hechos de “enamoramamiento forzado” de mujeres que son obligadas a sostener relaciones permanentes con integrantes de grupos armados³⁷.

La presión para vincular a niñas y jóvenes en redes de explotación sexual es una práctica que se refleja en informes de Nariño, Meta, Antioquia, Córdoba y Sucre. Al igual que en los casos de reclutamiento, las prácticas empleadas al parecer combinan el engaño con la fuerza. En los informes de Córdoba y Sucre de la Defensoría, y en los testimonios de comunidades en

³⁶ Al respecto, Defensoría del Pueblo IR 01 de 2011 del SAT señaló que, en zona urbana de un municipios de Córdoba, “en el último trimestre circularon dos pasquines amenazantes en los que se relacionaban sobrenombres o alias de varias mujeres a quienes acusan de ser promiscuas y ejercer el libertinaje sexual... La regulación de los hábitos sociales y pautas de comportamiento también viene siendo controlada por parte de los grupos armados ilegales quienes han lanzado en varias oportunidades panfletos amenazantes en contra de población LGBT y contra las trabajadoras sexuales del municipio, así como de forma general a la población, a quien advierte, a través de otro panfleto, sobre la ocurrencia de masacres en la zona para limpiarla de colaboradores, informantes, prostitutas y gay en lo que llamaron en su pasquín como el evento del “Sábado Negro”.

³⁷ En la NS 011 de 2011 al IR 06 de 2006 de Montelibano y Puerto Libertador de la Defensoría del Pueblo se informa que “dos mujeres pertenecientes a una misma familia, habitantes de la comunidad, fueron obligadas a ser compañeras sentimentales de miembros del grupo armado de las Águilas Negras”.

Buenaventura, Medellín, Tumaco, Villavicencio, es común escuchar que las niñas y jóvenes son inicialmente atraídas mediante regalos y luego forzadas a ejercer la prostitución³⁸. Las niñas así vinculadas pueden ser objeto de agresión posterior e incluso de muerte, como lo revelan también los hallazgos encontrados por la Defensoría del Pueblo³⁹.

A la explotación sexual se une la violencia sexual, como mecanismo de control o simplemente como violación de las libertades y derechos de personas que no cuentan con la capacidad de resistir a la agresión de un integrante de un grupo armado⁴⁰.

Personas en riesgo

En la actualidad la identificación del perfil de personas en mayor riesgo es más complejo que en el pasado. El crecimiento en número de organizaciones armadas y la diversificación de sus fuentes de financiamiento son unas de las principales causas. En la práctica, por ejemplo, la generalización de la extorsión en algunas zonas del país genera un riesgo potencial a un mayor conjunto de la población que está determinado en función del lugar de residencia y no de la actividad o del grupo social al cual pertenece la persona.

En el análisis de los casos de homicidio de población desplazada, el mayor porcentaje de las víctimas no ejercía liderazgo o actividad que permitiera identificarla dentro de un grupo particular de riesgo. Por el contrario, las condiciones de seguridad del lugar de llegada constituyen el principal factor de riesgo y explica el porque del segundo desplazamiento de un porcentaje significativo de población que acude a esa medida de protección.

En todo caso, es posible identificar algunos perfiles que pueden ayudar en el ejercicio de determinación del estatuto de refugiado y el diseño de mecanismos de protección para la población.

³⁸ Al respecto: Defensoría del Pueblo IR 01 de 2011 del SAT. *"Una modalidad que se da en la zona urbana y rural es que las niñas mayores de 12 años son seducidas o presionadas para tener relaciones sexuales con miembros de estos grupos armados a través del ofrecimiento de dinero, celulares, o compra de regalos; luego, estas adolescentes y jóvenes son sometidas a explotación sexual con fines comerciales a través de redes que son manejadas por mujeres que hacen parte de las estructuras armadas ilegales. La segunda modalidad consiste en que las niñas y adolescentes son buscadas por los grupos ilegales de la zona e incitadas a formar parte de las redes de prostitución y ante la negativa de ellas son víctimas de abuso y violencia sexual y en algunos casos se ha registrado el posterior asesinato de las mismas"*. En el mismo sentido ver NS 002 de 2011 al IR 006 de 2008: *"La utilización de niños y niñas para transportar droga y para la explotación sexual es una práctica utilizada por los grupos armados ilegales de la zona. Con base en la información obtenida por diversas fuentes, esta actividad se realiza de forma abierta y sin ningún control. La comunidad manifiesta que en Coveñas existen planes turísticos en donde se incluye a los menores de edad en paquetes de turismo sexual"*.

³⁹ NS 002 de 2011 al IR 006 de 2008 de la Defensoría del Pueblo, en el que se registra el caso en el Catatumbo de *"Una niña...de 14 años, procedente de Cúcuta, cuyo cadáver al parecer fue encontrado con señales de violencia sexual, tortura y sustancias estupefacientes el martes pasado 14 de diciembre 2010"*. En el mismo sentido se señala en NS 008 de 2011 de seguimiento al IR 20 de 2008 que en Sucre *"Existe un caso de dos niñas que eran presuntamente explotadas sexualmente y murieron por una sobredosis en noviembre del 2009 en un sitio conocido como Palo Blanco"*.

⁴⁰ En el IR 01 de 2011 del SAT de la Defensoría del Pueblo, se señala que *"la población adolescente sufre de manera continua la presión para que se vinculen como miembros al grupo ilegal y las niñas y mujeres son objeto de abusos o explotación sexual. Tanto en uno como en otro caso, los niños, adolescentes y jóvenes de estos municipios están expuestos a ser utilizados por estos grupos armados ilegales como instrumentos para la satisfacción de algún tipo de necesidad militar o sexual aprovechando las vulnerabilidades de tipo social y económico existentes"*.

Las personas que tienen ascendencia sobre la comunidad continúan siendo objeto de agresión por parte de los grupos armados en la medida en que, independientemente de la existencia o no de motivaciones políticas en su accionar, todos los grupos armados pretenden ejercer dominio local y apoderarse de los recursos; la población continúa siendo un botín apreciable para ellos. Es por eso que líderes comunitarios, profesores, religiosos y autoridades étnicas se encuentran dentro de las personas con alto riesgo en esos contextos.

Los transportadores y comerciantes representan el doble interés del control de las actividades cotidianas y de la información, así como el acceso a recursos de alta liquidez. Son igualmente líquidos los recursos provenientes de subsidios y salarios en los que es predecible y generalizada la fecha y lugar de desembolso. Por eso es que existe el interés de conocer la información de nóminas oficiales, en especial en los sectores de salud y educación. De igual manera, existe el acoso a los beneficiarios de subsidios del Estado, incluida la población desplazada. Esto podría explicar algunas amenazas a quienes dentro de la comunidad cuentan con la información de los beneficiarios de programas estatales. Entonces, dentro de los perfiles de riesgo se encuentran funcionarios públicos con conocimiento de nóminas y líderes que apoyan la distribución de subsidios estatales.

La revisión del perfil de las víctimas de homicidio registradas en medios de comunicación durante el primer trimestre de 2011, muestra la diversidad en el conjunto de las víctimas. En todo caso es posible clasificar algunos de ellos.

Posible móvil	Perfil – actividad – de la víctima
Control sobre la población. Impacto sobre liderazgos	<ul style="list-style-type: none"> • Líderes sociales, miembros de Consejos Comunitarios de comunidades afrodescendientes, autoridades indígenas, presidentes de JAC. • Profesores. • Pastores evangélicos
Control de la cotidianidad – control de circuitos económicos – y de la información	<ul style="list-style-type: none"> • Comerciantes • Prestamistas • Transportadores (conductores de transporte público urbano, mototaxistas, lancheros) • Vigilantes
Acceso a recursos – extorsión	<ul style="list-style-type: none"> • Transportadores • Prestamistas • Vendedores ambulantes • Ganaderos • Agricultores • Autoridades indígenas – presión sobre transferencias del nivel central -
Garantizar su acceso – mantenimiento – recursos para su sostenibilidad estratégica.	<ul style="list-style-type: none"> • Campesinos que se oponen al reclutamiento • Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no se vinculan al grupo o que promueven actividades alternativas. • Funcionarios públicos de alcaldías • Profesores • Líderes mineros • Líder comunitario • Reclamantes de tierra • Funcionarios judiciales • Abogados de víctimas • Abogados de paramilitares y narcotraficantes (posible riesgo de delación y arreglo con la justicia) • Desmovilizados
Interés político	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionarios públicos: Alcaldes, concejales. • Potenciales candidatos a alcaldías y concejos locales • Funcionarios judiciales

- Líderes sociales y comunitarios

Fuente: Bitácora del Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, Seguimiento de Prensa Sistema de Información de ACNUR.

III. Desplazamiento Forzado

Las emergencias derivadas del desplazamiento han presentado un crecimiento en número e intensidad entre el primer trimestre de 2010 y el mismo periodo de 2011. Mientras en el año anterior se presentaron 19 emergencias, en el primer trimestre de este año éstas se incrementaron en un 26% pasando al menos a 24, de conformidad con el seguimiento efectuado por ACNUR.

En intensidad el incremento es aún mayor. El número de víctimas creció más del doble. Entre enero y marzo de 2010 el número de personas desplazadas en eventos masivos fue cercano a las 5.500 personas, en los mismos tres meses de este año está cifra superó las 12.200 personas.

	Acción Social		ACNUR	
	Total 2010	Ene – Mar 2011	Ene – Mar 2010	Ene – Mar 2011
Emergencias por desplazamiento	59	16	19	24
Personas desplazadas	RUDP – 7,356 No incluidas: 5269 Total: 13,752	RUDP – 8,245 No incluidas: 752 Total: 8,997	5,531	12,281

Estas cifras son inferiores al consolidado que a mediados de abril había efectuado Acción Social. Para la entidad, los eventos de desplazamiento masivo fueron 16 y la cifra de personas expulsada en esta modalidad e incluidas en el RUPD fue de 8.245 personas. No obstante, la cifra de desplazamiento masivo del primer trimestre de 2011 es mayor que la del total de población desplazada en forma masiva registrada durante todo el 2010 – 7.356 personas – lo que demuestra que independientemente de la fuente y de la magnitud habría consenso en el hecho que el desplazamiento, y las emergencias humanitarias derivadas de éste, están sufriendo una transformación y un incremento⁴¹.

El desplazamiento continúa estando concentrado en algunas regiones del país. El 80% de las emergencias se ha presentado en el Pacífico y en la zona de influencia del Nudo de Paramillo. En esas emergencias se ha concentrado, a su vez, el 95% de la población que ha huido en desplazamientos masivos identificados por ACNUR.

Los seis departamentos que hacen parte de estas regiones – Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca – concentran el 62% del total del desplazamiento registrado por Acción Social durante el primer trimestre de 2011 y que, cómo se vio en el caso del homicidio, son los mismos departamentos que concentran el 50% de este delito durante 2010.

El desplazamiento, como medida extrema de protección de la población, responde a causas objetivas que explican el por qué las personas huyen en busca de protección a otras zonas del país. Paradójicamente, la menor frecuencia anual de desplazamiento en los últimos años ha incrementado la vulnerabilidad de la población desplazada, en la medida en que se ha

⁴¹ Acción Social. Observatorio Nacional de Desplazamiento Forzado. "Análisis de la tendencia de desplazamiento forzado". Documento de circulación restringida. Abril 2011.

incrementado la estigmatización hacia ésta y se ha ubicado el desplazamiento forzado como un problema superado en el contexto colombiano.

Las continuas emergencias derivadas del incremento de las lluvias en el país han contribuido a bajar la atención sobre la situación de las personas que huyen de la violencia, en especial por parte de organizaciones humanitarias que han concentrado sus esfuerzos en visibilizar una realidad reconocida por el conjunto de la sociedad y en complementar la respuesta institucional nacional y local.

Zona de influencia del Nudo de Paramillo⁴².

De acuerdo con la información que ha podido recoger ACNUR de manera directa y a través de fuentes secundarias,⁴³ más de 8.300 personas se vieron obligadas a desplazarse por diferentes causas de esta región en el primer trimestre de 2011. La región ha sufrido de manera especial el proceso de transición generado por la desmovilización de las Autodefensas y la reagrupación, surgimiento y disputa de territorios por parte de grupos armados que se ubicaron en la región desde 2006.

Las presiones para evitar procesos de restitución de tierras, tanto de propiedad colectiva como individual, han mantenido latente el riesgo de comunidades y organizaciones en la zona media y norte del Urabá Antioqueño y se ha materializado en el homicidio de población y en amenazas en contra de líderes comunitarios, comunidades específicas y organizaciones humanitarias y de derechos humanos acompañantes de la población⁴⁴.

La disputa del territorio y de la población entre las FARC y los Urabeños, Paisas, Rastrojos y Águilas Negras para obtener el control de zonas de cultivo, acopio y transporte de la coca ha dejado a la población a la merced de estos grupos. La incursión de nuevas organizaciones en los Valles del San Jorge y del Sinú ha incrementado los ataques en contra de la población y las restricciones de movilidad.

Los desplazamientos masivos han estado asociados a masacres y homicidios, al cambio en la presencia de grupos al margen de la ley en el área, a la amenaza sobre determinados sectores de la población, al incremento – tal y como ha sido evidenciado por los IR y NS de la Defensoría – en el reclutamiento de la población y la vinculación forzada a actividades delictivas, así como a la violencia sexual que están ejerciendo sobre la población⁴⁵.

El control de las rutas de comunicación entre el Bajo Cauca Antioqueño, la zona alta del Nudo de Paramillo, y la salida al mar, tanto por Córdoba como por Sucre, ha hecho de la zona la de mayor número de masacres en 2010, mayor desplazamiento y una de las mayores tasas de homicidio del país.

⁴² Para efecto del seguimiento que desde 2004 ha venido efectuando ACNUR, esta se encuentra integrada por el Urabá Antioqueño y Córdoba, el Bajo Cauca Antioqueño y las diferentes subregiones que integran el departamento de Córdoba.

⁴³ Informes de riesgo y notas de seguimiento del Sistema de Alerta Tempranas, reportes estadísticos de Acción Social, Boletines Humanitarios de la Sala de Situación Humanitaria de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA.

⁴⁴ Ver: Defensoría del Pueblo. NS No 005 de 2011 al IR 031 de 2.010

⁴⁵ Ver: Defensoría del Pueblo IR 001 de 2011; IR 03 de 2011; NS 05 de 2011 al IR IR 031 de 2010; NS No. 08 de 2011 al IR No. 29 de 2009 y NS No. 011 de 2011 al IR 06 de 2006.

A las actividades ligadas con el narcotráfico se suma las restricciones en movilidad para limitar el ingreso de fuerzas contrarias que genera especial riesgo sobre comerciantes y transportadores, quienes sufren adicionalmente por la práctica de la extorsión, que se extiende a un amplio espectro de víctimas en la región como funcionarios públicos, ganaderos, agricultores, profesores, entre otros.

Como se indica en la NS 011 de 2011 del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, *"resulta incomprensible que estos municipios [Montelíbano y Puerto Libertador] que han sido objeto de advertencias por parte del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo desde el año 2006 mantengan un alto nivel de riesgo para la población civil por el accionar de los grupos armados ilegales que generan una crisis humanitaria..."*

Algunas de estas situaciones se venían presentando desde finales del año anterior y se vieron agudizadas al inicio del 2011. Este es el caso de San Bernardo del Viento, en donde según las autoridades del municipio durante los últimos meses de 2010 y los primeros de este año más de 400 personas abandonaron veredas como la Rada, Tinajones y Nueva Estrella. Realidad que vino a denunciarse con ocasión del homicidio de los dos estudiantes de la Universidad de los Andes ocurrida en el mes de enero.

Las 9 emergencias restantes identificadas en la zona de influencia del Nudo de Paramillo en el primer trimestre del año están asociadas a combates entre estos grupos (Vereda Buenos Aires – Tierralta), reclutamiento de población (Tierralta, mediados de febrero); asesinato de población en medio de disputa por el control de áreas estratégicas (Tierradentro – Montelíbano); presión sobre la población que limita sus libertades y amenaza su vida e integridad (Puerto Nuevo, Puerto Libertador), amenazas de grupos armados sobre población indígena (caso del pueblo Zenú en Punta Verde).

Una de las presiones que ha sufrido la población ha estado relacionada con su involucramiento en el cultivo de la hoja de coca y la participación en marchas para limitar las acciones de erradicación forzosa adelantadas por el Estado. Este fue el caso de lo ocurrido en Anorí, Amalfi y Tarazá, en donde incluso personas que se negaron a marchar fueron víctimas de homicidio.

	Fecha	Municipio	Departamento	Vereda
1		San Bernardo del Viento	Córdoba	La Rada, Nueva Estrella, Tirajones.
2	15/01	Amalfi	Antioquia	
3	18/01	Tierralta	Córdoba	Buenos Aires
4	26/01	Anorí	Antioquia	
5	17/02	Tarazá	Antioquia	
6	21/02	Tierralta	Córdoba	
7	23/02	Montelíbano	Córdoba	Tierradentro
8	25/02	Planeta Rica	Córdoba	Punta Verde
9	9/03	Montería	Córdoba	Finca el Quindío
10	23/03	Puerto Libertador	Córdoba	Puerto Nuevo

Fuente: Acción Social, ACNUR, Defensoría del Pueblo, SSH-OCHA.

Litoral Pacífico

Durante el primer trimestre de 2011 se identificaron 9 emergencias derivadas del desplazamiento en esta región. En estas, de acuerdo con la información obtenida por ACNUR, se desplazaron 3.267 personas provenientes de cuatro departamentos distribuidos en cuatro grandes subregiones.

Hay elementos comunes que afectan en su conjunto al Litoral Pacífico, especialmente relacionados con la disputa de territorios para alcanzar el control de zonas de cultivo y las rutas de tráfico de drogas, así como por el acceso a otras fuentes de financiamiento que se agudizan por la llegada de nuevos grupos armados o por los cambios en las alianzas existentes. A su vez cada una de las subregiones – Atrato, Norte del Valle y Sur del Chocó, Cordillera y pacífico nariñense y caucano - presenta su propia especificidad.

En el Norte, la presión que se ha ejercido contra las FARC en zona de frontera ha generado una mayor incursión en zonas bajas de los afluentes del margen occidental del Atrato. Al parecer los controles sobre la población y su movilidad se han intensificado. Se han presentado homicidios en contra de líderes de la población que han sido la causa del desplazamiento de comunidades, como en el caso de la comunidad Emberá en el Río Perancho.

Las disputas entre la guerrilla y los grupos post desmovilización, o entre estos, es la principal causa de desplazamiento en las subregiones de las cuencas de los ríos San Juan y Baudó, y la zona central de la Costa Chocoana, en el municipio de Nuquí, tal y como lo advirtió el informe de riesgo 002 de 2011 de la Defensoría del Pueblo. Las comunidades indígenas han sufrido el impacto del accionar de estos grupos desde el 2007, cuando se presentó el primer desplazamiento masivo por enfrentamientos al parecer entre FARC y Rastrojos y que se ha repetido en 2008 y ahora mas recientemente en febrero de 2011.

La explotación ilegal de oro constituye otro factor de presión sobre las comunidades y podría estar explicando la amenaza sobre representantes de consejos comunitarios a lo largo del Pacífico, donde ha ocurrido la desaparición y homicidio de ellos. Uno de los casos más recientes se registró a principios de marzo en la cuenca del Río Cajambre en Buenaventura.

En los departamentos de Valle, Cauca y Nariño los consejos comunitarios han venido sufriendo presión por parte de los grupos armados que operan en la región. Los desplazamientos registrados en el primer trimestre de 2011 han tenido su origen en desapariciones y homicidios que vinculan a las FARC como causantes y en los que además del control de áreas estratégicas, como el Corregimiento 8 en zona rural de Buenaventura, la minería parece ser una causa constante en ellos.

En el Litoral Nariñense la población ve amenazada su vida e integridad por la disputa entre grupos post desmovilización y la guerrilla. El ejemplo más visible es la disputa entre FARC y Rastrojos que se presenta en el Charco, Olaya Herrera, Santa Bárbara Iscuandé, al igual que en Barbacoas y Ricaurte. Esta disputa ha incrementado las restricciones de movilidad a la población, los retenes en vías fluviales y terrestres.

Este enfrentamiento se ha concentrado también en la zona de cordillera en el Cauca, en el municipio de Argelia, dónde desde mediados del año anterior se han presentado desplazamientos, que se intensificaron en los meses de noviembre y diciembre, y que continuaron ocurriendo de manera individual en enero y febrero de este año.

En el caso del pueblo Awa, a mediados de marzo se presentó un nuevo desplazamiento. En esta ocasión originado por combates entre el Ejército y las FARC en zona de los resguardos de Magui y Pialapí Pueblo Viejo.

	Fecha	Municipio	Departamento	Vereda
1		Argelia	Cauca	
2	23/01	Riosucio	Chocó	Resguardo de Perancho
3	8/02	Timbiquí	Cauca	
4	18/02	Río Iró	Chocó	Los Mestizos
5	15/02	Bajo Baudó	Chocó	Río Docampadó
6	20/02	Medio Atrato	Chocó	La Villa
7	25/02	Bajo Baudó	Chocó	Río Pavasa
8	2/03	Buenaventura	Valle del Cauca	Corregimiento 8
9	20/03	Ricaurte	Nariño	

De esta manera, las principales emergencias por desplazamiento ocurridas durante el primer trimestre de 2011 han estado asociadas con las disputas entre grupos post desmovilización y organizaciones guerrilleras ligadas a intereses relacionados con el narcotráfico y la minería y, en los que además de combates entre ellos, se pretendió alcanzar mediante violencia el control de la población. Control que incluye, entre otros, el uso de la población para impedir el desarrollo de operaciones de erradicación.

A estas causas de desplazamiento se suma el impacto de los combates entre guerrilla y ejército en zonas donde la operación militar se ha dirigido en contra de las figuras visibles de las FARC, como es el caso del sur del Tolima y cuyo impacto se amplía al norte del Cauca y al departamento del Huila.

Los ataques contra la fuerza pública, incluidos los hostigamientos y destrucción de puestos de policía en corregimientos como Vegalarga, y los enfrentamientos constantes en los municipios de Caldon y Caloto en el nororiente del Cauca han sido causa de desplazamiento de al menos 400 personas en este trimestre.

Otros casos de desplazamiento.

	Fecha	Municipio	Departamento	Vereda
1	7/01	Vistahermosa	Meta	
2	18/01	Neiva	Huila	Vegalarga
3	21/01	Caloto	Cauca	
4	23/01	Medellín	Antioquia	Comuna 13
5	4/02	Tiquisio	Bolívar	Puerto Coca y Tiquisio Nuevo

Sin que se tenga evidencia de desplazamiento masivo, se ubican otras áreas de especial riesgo de desplazamiento en: i) zonas de frontera: pareciera que la presión generada acerca de la presencia de grupos guerrilleros en la frontera con Panamá y Ecuador está incrementando la presión en las franjas fronterizas, tal y como se evidencia en la zona del Darién, como se registra en los límites entre Putumayo y Nariño (Orito – Ipiates) y en la zona del Río San Miguel en el Putumayo y en la que además de dos masacres en el primer trimestre del año se presentó un paro armado en el mes de marzo. ii) Áreas incorporadas dentro de programas de restitución, especialmente cuando de las mismas se deriva cambio en la destinación del uso de la tierra y puede afectar inversiones realizadas durante el tiempo de desplazamiento de la población.

A modo de cierre

Como queda planteado en el presente análisis, el contexto de riesgo para la población continua siendo complejo, pues entran en juego dinámicas de revitalización de la violencia en términos de la acción de grupos armados ilegales y la intensificación del conflicto en ciertas zonas, el contexto político electoral que configura de hecho un escenario de intereses cruzados y el impacto que lo anterior ocasiona sobre la población.

A modo de ilustración, presentamos enseguida el mapa de la presencia de las oficinas de ACNUR en terreno, que en su mayoría coincide con las regiones señaladas en este análisis como los departamentos con zonas de riesgo más preocupantes, entre ellos: Antioquia, Córdoba, Sucre, Chocó, Norte de Santander, Arauca, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Nariño.

Para el trabajo de ACNUR en Colombia es fundamental mantener una dinámica de análisis que permita adecuar su trabajo de protección a las necesidades que la población y las realidades regionales y nacional le revelan y, de esta manera, mantener la pertinencia de su operación. Por tal razón, próximamente se dará a conocer el siguiente análisis de la coyuntura para el periodo abril – junio de 2011.

